

4. El estado del malestar

A pesar del aumento del gasto social, la desigualdad entre los ciudadanos ha alcanzado niveles récord. El Estado del Bienestar se revela ineficaz para combatir la pobreza y crear oportunidades

Julio Pomés, analista económico de ABC y presidente de Civismo

El pasado 23 de octubre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentaba orgulloso sus Presupuestos: “Son los más sociales de la democracia”. Esta frase puede sonar lapidaria, pero a quienes siguen la actualidad parlamentaria no pareció sorprenderles. No es la primera vez que los Presupuestos “son los más sociales de la democracia” y tampoco parece que sea útil para la sociedad.

Desde el 2008, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, ha pasado de 31,3 puntos a 34, después de impuestos y transferencias. Por po-

nerlo en contexto, 0 puntos sería la igualdad absoluta (todos tienen los mismos ingresos) y 100 la desigualdad absoluta (una sola persona dispone de toda la renta nacional).

Como el 0 y el 100 son valores inalcanzables, los mejor posicionados obtienen valores en torno al 25 (países nórdicos en su mayoría) y los peores, ligeramente por encima del 60 (Sudáfrica). En una horquilla de sólo 35 puntos, donde cada año apenas se producen variaciones de unas décimas, es fácil comprender que una diferencia de 2,7 puntos se considere enorme.

Otro aspecto a destacar es que este cambio no se debe a la crisis únicamente, dado que una caída de los ingresos de todas las personas por igual no produciría ninguna variación en los indicadores de igualdad. De hecho, en el resto de los PIGS (Grecia, Italia y Portugal), el coeficiente de Gini ha caído una media de 1,7 puntos desde 2007 y la media de la Unión Europea, tanto la de los Quince como la general, apenas se ha visto afectada.

Por otra parte, la tendencia general en los últimos años es hacia una mayor igualdad, al menos dentro de los países desarrollados. Es razonable que si, en un contexto de crisis, un Gobierno debe reducir los gastos, la renta disponible de los ciudadanos se iguale.

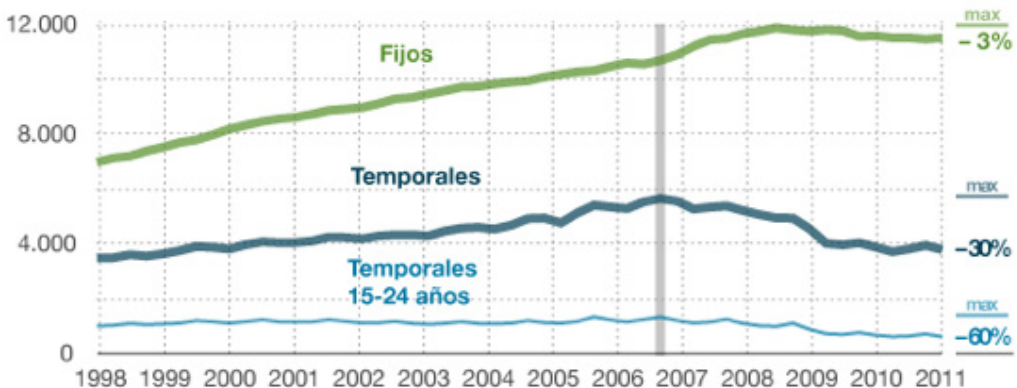
Es lo habitual y lo más fácil, aunque puede que no lo más eficiente, y es también lo que ha pasado en España. Pero no ha tenido el mismo resultado.

El mercado de trabajo ha sido disfuncional hasta la entrada en vigor de la última reforma laboral

Una respuesta puede estar en un mercado de trabajo disfuncional, que es lo que ha habido hasta la entrada en vigor de la última reforma laboral. Con la anterior legislación, costaba mucho más despedir a quienes llevaban más tiempo y además recibían indemnizaciones mucho mayores, por lo que la mayoría de los ajustes se producían a base de empleo temporal, independientemente de que esos trabajadores fueran más o menos productivos.

Ahora bien, ¿es malo que exista desigualdad? Los economistas defien-

Total de trabajadores (en miles).



Fuente: INE

Politikon.es

den que un cierto grado de desigualdad estimula el crecimiento, ya que los ciudadanos se esforzarán más por integrarse entre los ciudadanos que disfrutan de unos mayores ingresos, y mejorarán su formación y su trabajo, lo que beneficiará a toda la sociedad.

Por otra parte, una igualdad forzosa no sólo frena el crecimiento por la vía de los impuestos, sino también por la vía del gasto: un reciente estudio de la Obra Social La Caixa muestra que, mientras en un Estado del Bienestar moderado, como es España, cinco de cada diez ciudadanos salen de la pobreza al cabo de dos años por sus propios medios, en Francia apenas los consiguen tres de cada diez, porque un gasto excesivo da un mal incentivo a los beneficiarios.

Sin embargo, es más fácil aceptar la desigualdad implícita porque un puesto de trabajo es menos valioso que otro que porque una regulación nos impide acceder a un puesto de trabajo en las mismas condiciones que otro. En nuestro país, a pesar de que el gasto social no es muy elevado, el Gobierno ha intentado hacer política social a base de crear empleo público.

¿Es mala la desigualdad? Los economistas defienden que un cierto grado de desigualdad estimula el crecimiento

En la reciente Encuesta de Estructura Salarial del INE, se demostró que los empleados públicos cobran un 40% más que los privados. Esto resulta útil para comprobar cómo algunas de las ocupaciones más fáciles de externalizar cuentan con los sueldos más inflados: es el caso de los encargados de restauración o de mantenimiento, donde los salarios superan en un 60% la media del sector privado.

Las Comunidades Autónomas, con un importante volumen de contratación, han agravado estas diferencias: mientras que en el sector privado apenas un 21,9% de los trabajadores ganan más de 2.071 euros al mes, en la Administración regional el 65,4% de los empleados superan esa cifra.

Por otra parte, el gasto social propiamente dicho fracasa a la hora de reducir las desigualdades. De acuerdo con la Fundación Alternativas, en España apenas se consigue reducir la pobreza entre una tercera y una cuarta parte del resto de los países de la OCDE, pero no por falta de presupuesto: un euro empleado en el resto de los países es tres veces más útil, combatiendo la desigualdad, que en España.

Una puntualización: la tendencia a una mayor desigualdad es irresoluble, al menos a medio plazo. Incluso Suecia, uno de los Estados más volcados en la lucha contra los desequilibrios sociales, ha tenido que dar marcha atrás y aceptar que la desigualdad es inevitable. Y es una tesis que, cada vez más, los políticos socialdemócratas y

sindicalistas de todo el mundo están teniendo que aceptar.

Si en el siglo XIX era habitual que el trabajador necesitara de la acción de aquellos para mejorar su posición, el siglo XXI está marcado por trabajadores que van por libre, que se pueden especializar en nichos en los que apenas encuentran competencia, negociar las condiciones por su cuenta y vender sus servicios en todo el mundo a través de Internet. Es una economía donde unos pocos obtienen una remuneración muy elevada pero, como venden a todo el mundo, pueden ofrecer un precio más bajo.

¿Significa esto que los Gobiernos tienen que dejar de luchar contra la desigualdad? No. Una sociedad donde los ciudadanos disfrutan de un nivel de vida similar y existe una fuerte clase media está más cohesionada, es más estable y genera menos problemas de delincuencia y violencia. El Estado no tiene por qué garantizar la igualdad de niveles de consumo, sino la igualdad de oportunidades.

Por poner un ejemplo práctico, cuando los niños están en preescolar y primaria, según muchos expertos, tendría sentido repartir complementos vitamínicos, ya que una alimentación deficiente causada por su familia podría provocar diferentes rendimientos que se irían arrastrando a lo largo de años. En cambio, cuando se trata de formación profesional o la universidad, ya no es necesario que el Estado se vuelque tanto: probablemente sería

más eficiente si dejara de mantener centros mediocres, pero se encargara de becar fuertemente a un número reducido de alumnos.

Si de niño se ha beneficiado de una buena cultura financiera, probablemente cuando trabaje será capaz de ahorrar para situaciones de desempleo y para su pensión, con lo que el importe que el Estado destine a los estadios más avanzados podría reducirse considerablemente a largo plazo.

En el momento en el que un individuo con buenas capacidades queda excluido de la creación de valor, toda la sociedad sale perdiendo. ¿Qué pasaría si el empresario que crea cientos de puestos de trabajo en el futuro fuera un excluido hoy? Por eso, cada vez se insiste más en que los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos en las primeras etapas, en vez de crear un aparato estatal para todos.

En un estudio del Banco Mundial, España sale muy mal parada: es donde hay menos igualdad de oportunidades, por detrás de todos los países europeos, a excepción de Irlanda, Lituania y Portugal. En total, el resultado es que en España prácticamente se bloquea el acceso a la cadena de valor

Los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos en las primeras etapas, en vez de crear un aparato estatal para todos

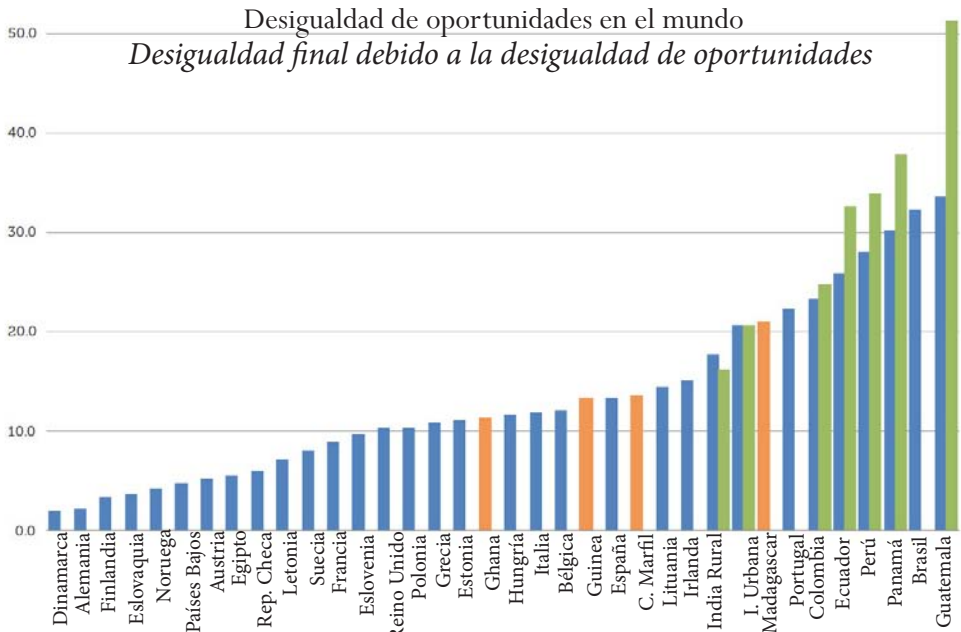
a una importante capa de la población, y los resultados son demoledores.

En los países donde la falta de oportunidades es extrema, es probable que se generen grandes bolsas de pobreza y violencia, mientras las élites tienden al inmovilismo social. En España no se llega a tanto, pero existe una obvia falta de dinamismo que viene, por un lado de que existe demasiado gasto público y, por otro, de que no se gasta en quienes mejor lo pueden aprovechar.

El problema es que el sistema crea grandes bolsas de beneficiados de la intervención estatal, que no tienen por qué ser quienes más lo necesitan (véase el caso de muchos empleados

públicos), en lugar de ofrecer unos impuestos al trabajo, incluyendo cotizaciones sociales, más baratos. Las transferencias no se producen de ricos a pobres, o hacia quienes podrían aprovecharlas mejor, por poner el énfasis en los niños, sino de grupos desorganizados a otros organizados.

Quienes trabajan en los mercados más libres ven como gran parte de sus ingresos va a parar a aquellos servicios encarecidos por una regulación deficiente, un fuerte entramado de sectores protegidos que atenazan mercados como la telefonía móvil, la energía o el transporte. Esto genera varios problemas: falta de puestos de trabajo en los sectores protegidos, fal-



Sources: Cogneau and Mesple-Soms (2008), Ferreira and Gignoux (2011), Marrero and Rodriguez (2010a), Belhaj-Hassine (2011) and Singh (2012).

ta de crecimiento e innovación y un precio excesivo que acaba perjudicando a los sectores no intervenidos.

¿Cuáles sería los efectos en el caso de liberalizar estos mercados? No existen aproximaciones al mercado español, pero Italia es muy similar en este aspecto. El estudio 'Macroeconomic effects of greater competition in the service sector: the case of Italy' señala que, en diez años, el PIB se elevaría en un 11% y la bajada de precios incrementaría el poder adquisitivo de las familias en un 3,5%.

A menudo se justifica la existencia de monopolios o de intervención pública con el argumento de la inversión. Es probable que si el Gobierno no garantizara la explotación en exclusiva de una patente farmacéutica nadie quisiera entrar en ese mercado, porque la rentabilidad sería muy reducida. Sin embargo, en los casos actuales el resultado es el opuesto.

Por ejemplo, una licencia de taxi puede llegar a costar 200.000 euros en algunas ciudades, mucho más que la inversión en el coche, y los beneficios extra que se ganen en un mercado con menos oferta se destinarían al pago de intereses por la deuda originada. Mientras que en una economía abierta los trabajadores se desplazarían a un sector cuando hubiera demanda y se irían si fracasan, en un mercado intervenido las fuertes barreras de entrada actúan también como barreras de salida dado que, una vez que se ha conseguido plaza en un coto privado, nadie

En una reciente encuesta del CIS, dos de cada tres ciudadanos creen que pagan más impuestos de lo que reciben del Estado

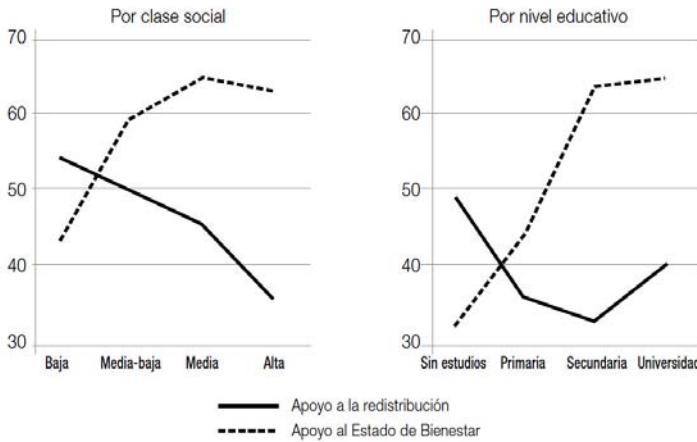
quiere abandonarla por si a la larga pudiera salir perdiendo.

Por otra parte, un mercado donde las licencias son más limitadas dispara la especulación, lo que ahonda en una sociedad con graves diferencias de ingresos vinculados a la buena o mala fortuna de entrar en el mercado en un momento determinado.

Otro efecto negativo de las transferencias cruzadas y las subvenciones encubiertas es el malestar general. En una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos de cada tres ciudadanos (el 64,6%) se mostraron convencidos de que pagan más impuestos que lo que reciben del Estado. La cruda realidad es que muchos no saben lo que realmente están pagando (cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador, por ejemplo) y otros tantos no saben lo que realmente están recibiendo y creen que las situaciones de privilegio son el estado natural.

Otros estudios del Centro muestran una aparente paradoja: mientras que quienes pertenecen a las clases más bajas dan su apoyo a la redistribución de ingresos, pero rechazan el Estado

Gráfico 4. Preferencias por la redistribución y la expansión del Estado del Bienestar por clase social y nivel educativo.



Fuente: Estudio CIS 2799

del Bienestar, entre las clases altas el efecto es el contrario. Más aún, el 70% de quienes no tienen estudios rechaza el Estado del Bienestar (ampliamente apoyado por quienes tienen estudios universitarios), pero apoya las políticas redistributivas.

Si se analiza el funcionamiento de las políticas de Bienestar, el resultado no debería ser desconcertante, ya que en muchas ocasiones las políticas de redistribución actuales crean un flujo que parece no tener un sentido de “justicia social”. Por ejemplo, la conquista de derechos laborales dentro de la legislación tradicional española favorece a quienes ya tienen trabajo, en detrimento de quienes quedan excluidos del mercado laboral; el rescate a los bancos favorece a quienes ya tienen cierta riqueza invertida en ac-

ciones de esos bancos que se depreciarían en el caso de que el rescate se tuviera que hacer con una ampliación de capital; y las políticas de vivienda favorecen a quienes tienen una cierta cantidad de ingresos, aunque podrían ascender en

la escala laboral después de conseguir una vivienda protegida.

Resolver la maraña parece complicado, sobre todo porque los sectores más beneficiados por las políticas actuales notarán un fuerte deterioro en su calidad de vida, mientras que el resto apenas notará una mejora sustancial hasta dentro de una década.